

C.A. de Santiago

Santiago, siete de julio de dos mil veintitrés.

A los folios 18 y 19, a todo, téngase presente.

Vistos:

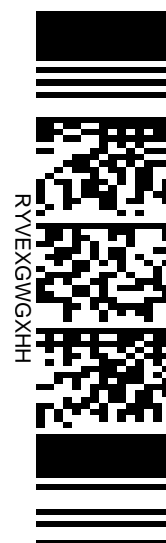
Se reproduce la sentencia en alzada, sustituyendo en su motivo 15° tanto el guarismo “50.000.000.-“ como su expresión en letras, por “60.000.000.-“ y “sesenta millones”, respectivamente; y se elimina su considerando 16°.

Y se tiene en su lugar además presente:

Primero: Que las vejaciones sexuales constituyen una experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico, desde que deja a la víctima *“humillada física y emocionalmente”*, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas.

Por su parte, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se define la violencia contra la mujer como *“todo acto de violencia basado en la pertenencia de sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer (...)”*.

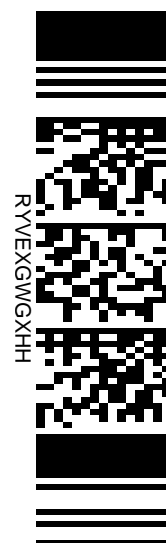
Segundo: En efecto, conforme lo señala la Convención de Belém do Pará, la violencia contra la mujer no sólo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es *“una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”*, que *“trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel*



educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”.

Tercero: Que la violencia basada en el género, es decir aquélla dirigida contra una mujer por ser mujer o la que la afecta de manera desproporcionada, es una forma de discriminación en contra de la mujer, tal como han señalado otros organismos internacionales de protección de derechos humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el CEDAW. Tanto la Convención de Belém do Pará (preámbulo y artículo 6) como el CEDAW (preámbulo) han reconocido el vínculo existente entre la violencia contra las mujeres y la discriminación. En el mismo sentido, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Estambul, 2011) afirma que *“la violencia contra las mujeres es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación”*, así como que *“la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el género”*.

Siguiendo la línea de la jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno.



Cuarto: Que, en consecuencia, tal padecimiento debe ser compensado en autos, y con el fin de analizar la severidad del sufrimiento experimentado, se deben tomar en cuenta las circunstancias específicas de cada caso. Para ello, se deben considerar las características del trato, tales como su duración, el método utilizado o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, los efectos físicos y mentales que éstos pueden causar, así como las condiciones de las personas que los padecieron, entre ellos, la edad, el sexo, el estado de salud, entre otras circunstancias personales.

Quinto: Que, en consecuencia, tanto por el carácter del tratamiento dispensado, como porque así se encuentra avalado por la prueba rendida en el proceso, la actora, en cuanto víctima de violencia sexual por parte de agentes del Estado, claramente continúa padeciendo sufrimiento por dicha agresión, por lo que al analizar los hechos y sus consecuencias y determinar el *quantum* de la indemnización que resulta procedente, esta Corte tomará en cuenta que se vio afectada por los actos de violencia de manera diferente a los hombres, los que se consideran como especialmente graves y reprobables, tomando en cuenta su vulnerabilidad y el abuso de poder que desplegaron los hechores.

En consecuencia, este tribunal elevará el monto de lo otorgado en primera instancia, por considerarlo más adecuado a los hechos asentados en el proceso y el carácter de la conducta que ha generado esta obligación de resarcir.

Sexto: Que la concesión de reajustes respecto de una cantidad que se ordena pagar judicialmente obedece a la necesidad de velar por que la moneda mantenga su poder adquisitivo



conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor, pero tratándose de daño moral corresponde otorgarlo desde la fecha en que la sentencia que los fija queda ejecutoriada, pues es esa la ocasión en que aquéllos han quedado determinados y hasta la época de su pago efectivo.

Séptimo: Que, por su parte, los intereses, se deberán desde que el deudor se ha constituido en mora, esto es, en la época en que la sentencia quede ejecutoriada -artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto aquélla es la data cierta en que se ha reconocido la existencia de la obligación para el demandado- y que el deudor haya sido judicialmente reconvenido hasta la fecha de su efectivo pago, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1557 y 1551 N° 3 del Código Civil.

Por estas consideraciones, **se confirma** la sentencia apelada de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictada por el Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, en autos Rol C-6.200-2022, **con declaración**, que se eleva a \$60.000.000.- (sesenta millones) la suma que el Fisco de Chile deberá pagar a la parte demandante por concepto de daño moral, cantidad que experimentará los reajustes e intereses que se devenguen desde la fecha en que el fallo apelado quede firme y ejecutoriado y el deudor hubiere sido reconvenido, respectivamente.

Se previene que el abogado integrante señor Asenjo concurre a la decisión que precede, pero sin formular declaración respecto del monto de la indemnización otorgada, por considerar que la concedida en primera instancia resulta acorde a los hechos establecidos.

Regístrese y comuníquese.



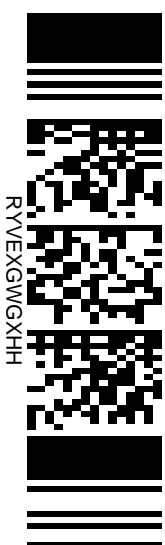
Nº Civil-2797-2023.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros señora Graciela Gómez Quiral, señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero y el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, siete de julio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.





RYEXGWGXHH

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Graciela Gomez Q., Veronica Cecilia Sabaj E. y Abogado Integrante Rodrigo Asenjo Z. Santiago, siete de julio de dos mil veintitrés.

En Santiago, a siete de julio de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>